



FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO

Informe de gestión **2025**

Oportunidades
para todas las personas.

Mensaje de nuestro director

El 2025 fue un año que nos obligó a salir de la zona de confort. **La congelación de fondos provenientes del Gobierno de los Estados Unidos** marcó un punto de inflexión para el sector del desarrollo a nivel global. Para muchas organizaciones, esto significó detener procesos, perder capacidades y, en algunos casos, cerrar ciclos construidos durante años. Para nosotros, también fue un momento desafiante.

En PADF Colombia, este contexto nos llevó a mirarnos con honestidad y a preguntarnos no solo cómo continuar, sino para qué y con quién hacerlo. La respuesta no surgió de un plan perfecto, sino de algo más profundo: nuestra capacidad de adaptarnos con resiliencia e innovación, sin perder de vista el propósito que orienta nuestro trabajo.

La diversificación de las fuentes de financiamiento, que veníamos fortaleciendo desde años atrás, fue determinante para sostener la operación en medio de la incertidumbre. Lo hicimos desde nuestras fortalezas: construir alianzas, generar conocimiento útil y actuar con sentido de urgencia. Hoy entendemos con mayor claridad que el futuro de la cooperación no depende únicamente de los recursos disponibles, sino de la capacidad de articular actores, movilizar confianza y demostrar, con evidencia, que el impacto es real.

Este proceso reafirmó una convicción esencial: **nuestro valor no está solo en ejecutar proyectos, sino en lo que dejamos instalado en los territorios.** Está en las capacidades que permanecen, en las redes que se fortalecen y en la autonomía que se construye junto con las comunidades. Ese es, en esencia, el verdadero indicador de sostenibilidad.

En medio de este escenario, propiciamos una conversación necesaria con nuestros aliados: cuando todo tiembla, ¿quién sostiene? La respuesta fue clara y, al mismo tiempo, exigente: sostener es una tarea colectiva. Requiere un ecosistema capaz de articular al sector público, al sector privado, a la cooperación internacional, a la academia, a los medios de comunicación y, sobre todo, a las comunidades que todos los días resisten, crean y transforman.



Ese diálogo nos dejó una certeza: el sector no necesita menos cooperación, sino una mejor cooperación; más articulada, más transparente, más consciente de su papel y más dispuesta a innovar.

El 2025 también dejó lecciones que hoy orientan nuestra hoja de ruta. **Nos recordó que la resiliencia no es un discurso, sino una práctica cotidiana**, y que el conocimiento, cuando se sistematiza, se mide y se comparte, abre la puerta a nuevas oportunidades.

Cerramos el año con 17 proyectos implementados o en ejecución. Detrás de esa cifra hay un equipo que supo adaptarse, reorganizarse y responder en medio de la incertidumbre, manteniendo intacto su compromiso con las personas y los territorios.

De cara al 2026, asumimos nuevos desafíos y oportunidades con responsabilidad. Fortaleceremos nuestras alianzas con el Estado colombiano, ampliaremos nuestra presencia en nuevos ecosistemas de cooperación y profundizaremos nuestro enfoque en resultados, impacto y aprendizaje.

Hoy, más que nunca, creemos que este es un momento para innovar con propósito, para ser más eficientes sin perder lo humano y para demostrar que cada recurso invertido puede transformar vidas.

En medio de la incertidumbre que marcó el 2025, hay algo que permanece intacto: la convicción de que, trabajando junto a las comunidades, es posible construir un país más justo, resiliente y con más **oportunidades para todas las personas.**

Roberto Obando
Director General



Cifras consolidadas de nuestra gestión 2025

17 proyectos implementados

87.192 personas atendidas, de las cuales **48.594** fueron mujeres

124 personas pertenecientes a comunidades indígenas

3.327 personas afrocolombianas

13.586 personas migrantes

30 departamentos de cobertura

281 municipios atendidos

793 funcionarios capacitados

61 obras de infraestructura social desarrolladas

3.531 personas apoyadas en medios de vida

5.945 niñas, niños y jóvenes atendidos

626 organizaciones fortalecidas



Nuestra ruta para generar impacto

Construimos oportunidades para todas las personas

En la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF Colombia) trabajamos con una visión clara: contribuir a la construcción de oportunidades para todas las personas, sin importar su origen o sus circunstancias. Esa visión orienta nuestra acción en Colombia, donde, desde hace más de 25 años, acompañamos a comunidades e instituciones en la búsqueda de soluciones sostenibles a desafíos sociales, económicos e institucionales complejos.

Como organización independiente y sin ánimo de lucro, afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), PADF combina más de 60 años de experiencia en América Latina y el Caribe con conocimiento local, capacidad técnica y una comprensión profunda de las dinámicas territoriales. Este acumulado nos ha permitido consolidar un modelo de intervención que salva vidas, promueve el crecimiento económico y fortalece la seguridad y el Estado de derecho.

Nuestro modelo se sustenta en un principio central: la articulación. A lo largo de estos años nos hemos consolidado como un enlace estratégico entre comunidades, gobiernos nacionales y locales, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y actores del sector público y privado. Desde este lugar, conectamos necesidades y capacidades, facilitamos el diálogo entre agendas locales y nacionales, y contribuimos a que las respuestas institucionales sean más pertinentes, coordinadas y sostenibles.

Este rol articulador constituye uno de nuestros principales diferenciales. Actuamos como puente entre actores que históricamente han operado de manera fragmentada y generamos condiciones para construir confianza, alinear intereses y movilizar soluciones compartidas. **Nuestra trayectoria en los territorios nos ha permitido fortalecer una capacidad operativa sólida, con despliegue ágil** incluso en contextos complejos, y, al mismo tiempo, incidir en la agenda pública al vincular las necesidades reales de las comunidades con políticas, planes y decisiones institucionales.



Otro componente esencial de nuestro modelo es el conocimiento técnico. A lo largo del tiempo hemos desarrollado metodologías propias que fortalecen la autogestión, el empoderamiento y la construcción de capital social. Entre ellas se destacan las **Iniciativas con Balance Positivo (IBP®)**, registradas por PADF Colombia en 2013. Esta metodología promueve la corresponsabilidad entre comunidades, gobiernos y sector privado mediante procesos participativos orientados a identificar necesidades, concertar decisiones y ejecutar soluciones concretas a retos comunes. Su implementación ha contribuido a mejorar el relacionamiento entre comunidades y actores institucionales, facilitar el diálogo, disminuir conflictos sociales y promover acuerdos sostenibles con enfoque territorial. Desde su creación, las IBP® han beneficiado a más de 224.000 personas y han dado lugar a más de 930 iniciativas en Colombia, consolidándose como una herramienta de innovación social con resultados sostenibles y potencial de aprendizaje regional.

Nuestro enfoque estratégico parte del fortalecimiento del tejido social y de la gobernanza comunitaria. Más que intervenciones aisladas, promovemos procesos sostenidos que construyen entornos habilitantes para la acción colectiva, articulan esfuerzos entre ciudadanía, instituciones y sector privado —formal e informal— y fortalecen capacidades locales para responder de manera sostenible a los desafíos del territorio. Esta perspectiva permite avanzar hacia soluciones basadas en la corresponsabilidad, la participación y la apropiación social del desarrollo.

Desde esa lógica, estructuramos nuestra intervención en tres líneas estratégicas complementarias. La primera, **Salvar vidas**, orientada a brindar asistencia humanitaria vital y apoyo en contextos de emergencia para que las personas recuperen estabilidad y puedan seguir adelante en sus comunidades. La segunda, Promover el crecimiento económico, enfocada en impulsar la inversión, fortalecer capacidades para el trabajo y fomentar medios de vida sostenibles que favorezcan la autosuficiencia. La tercera, **Fortalecer la seguridad y el Estado de derecho**, dirigida a mejorar la gobernanza, prevenir la violencia, ampliar el acceso a la justicia y contribuir a la estabilidad y la cohesión social.



En el centro de este modelo está nuestro compromiso con las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. Diseñamos e implementamos soluciones adaptadas a cada contexto, con una combinación de rigor técnico, presencia territorial y vocación de servicio. Todo ello bajo estándares de calidad que garanticen eficiencia, mejora continua y transparencia, respaldados por la certificación **ISO 9001:2015 No. SC 6684-1**, otorgada por ICONTEC.

Nuestra misión refleja con claridad esta apuesta. **PADF Colombia trabaja en alianza con distintos actores para acompañar a comunidades y poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad en el país**, generar empleo, desarrollar soluciones socioeconómicas sostenibles, fortalecer la respuesta ante fenómenos migratorios, promover el respeto y la protección de todas las personas y contribuir al fortalecimiento institucional para avanzar en la paz, la justicia y la seguridad. Con el apoyo de cooperantes nacionales e internacionales, del sector público, del sector privado y de las propias comunidades, promovemos la responsabilidad social y fortalecemos la cooperación para alcanzar metas comunes.

Esta labor se sostiene, además, sobre una cultura organizacional guiada por el modelo **HEART**, que sintetiza los valores que orientan nuestro actuar: honestidad, como base de la confianza; excelencia, como compromiso con el más alto nivel de desempeño; responsabilidad, como principio de transparencia y rendición de cuentas; respeto, como fundamento de entornos inclusivos; y trabajo en equipo, como fuerza colectiva para la transformación social.

Así, nuestro modelo de intervención no solo responde a necesidades inmediatas, sino que contribuye a fortalecer capacidades, consolidar confianza y ampliar oportunidades sostenibles en los territorios. Esa es la apuesta de PADF Colombia: convertir la **cooperación en resultados**, las alianzas en valor público y el trabajo con las comunidades en transformaciones duraderas.



Programas destacados

Firmes en la adversidad, audaces ante el cambio

Hay años que pueden planearse y ejecutarse conforme a esa planeación. Y hay otros que obligan a aprender sobre la marcha. El 2025 fue uno de ellos. Un año atravesado por decisiones globales que transformaron la cooperación internacional, por territorios donde la seguridad cambió de un momento a otro y por comunidades que, aun así, no dejaron de insistir en algo profundamente humano: quedarse, reconstruir y seguir adelante.

En ese contexto, nuestro trabajo se convirtió en lectura constante del entorno, en capacidad de adaptación y, sobre todo, en presencia. Entendimos que, cuando las condiciones se vuelven inestables, lo que realmente sostiene la intervención es la capacidad de comprender lo que cambia y ajustar la respuesta sin perder el propósito.

Así operamos este año: no resistiendo el cambio, sino transformándonos con él.



Salvar vidas

El instante en que una decisión redefine el futuro

En un municipio del Bajo Cauca, un joven estuvo a punto de tomar una decisión que habría marcado su vida para siempre. No fue un momento dramático ni visible. Fue, como suele ocurrir en estos contextos, algo silencioso, progresivo, casi inevitable. Durante meses, el entorno le había mostrado una única opción posible. Hasta que apareció otra.

Esa alternativa no surgió de la nada. Fue el resultado de un trabajo sostenido en el territorio a través del programa **Colombia Child Protection Compact (CPC)**, implementado con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Mientras, en el plano institucional, se consolidaban Equipos de Acción Inmediata (EAI) en 11 municipios y más de 1.300 funcionarios y líderes comunitarios fortalecían sus capacidades para prevenir el reclutamiento ilícito de niñas, niños y adolescentes, en el plano humano comenzaban a ocurrir cambios más profundos: conversaciones, referentes y oportunidades que antes no existían.

La historia de este joven, que bien podría ser la de muchos otros en regiones como Montes de María, Urabá, La Mojana o Cali, se resume de forma sencilla: volvió a pensar en estudiar. En ese gesto, aparentemente pequeño, se concentra el verdadero sentido de intervenir a tiempo. La innovación aquí no fue tecnológica ni metodológica en abstracto; fue entender que la protección no empieza cuando ocurre el daño, sino cuando se logra interrumpir su posibilidad. En esa misma lógica se inscribe la atención brindada a 72 víctimas de reclutamiento ilícito bajo el Modelo de Cuidado Informado en Trauma (CIT).



CPC | DEL MIEDO AL LIDERAZGO COMUNITARIO

Una joven Agente de Cambio contó que desde niña soñaba con ser odontóloga o psicóloga porque siempre quiso ayudar a los demás. Pero la violencia, el desplazamiento y la falta de oportunidades fueron apagando esa convicción, hasta hacerle creer que ese futuro no era para ella. En el programa encontró, por primera vez en mucho tiempo, un espacio seguro para hablar de sus miedos sin sentirse juzgada y para entender que la protección, la participación y la formación también son derechos.

Otro joven participante relató cómo fue engañado por un actor armado que le prometió hogar y seguridad, cuando en realidad lo estaba acercando a una red de violencia y control. Ambos testimonios revelan una misma verdad: los adolescentes no necesitan únicamente advertencias sobre el peligro; necesitan oportunidades concretas para fortalecer su autoestima, recuperar su voz y reconocerse como personas con derecho a elegir.

Esa misma lógica, la de intervenir antes de que la vulnerabilidad se convierta en destino, marcó también el trabajo con población migrante proveniente de Venezuela. En un país que siguió recibiendo a miles de personas obligadas a dejar atrás su hogar, su estabilidad y sus redes de apoyo, la migración no fue solo un tránsito geográfico, sino una ruptura profunda en la vida cotidiana. Muchas de esas personas llegaron a Colombia cargando no solo maletas ligeras, sino duelos acumulados, experiencias de violencia y una incertidumbre que erosiona incluso lo más esencial: la capacidad de imaginar el futuro. Orlando y Edith eran dos de ellas. Cuando iniciaron su proceso, no estaban pensando en integrarse; apenas intentaban sostenerse día a día, sin una idea clara de mañana.

Su llegada a Bucaramanga estuvo marcada por profundas afectaciones emocionales derivadas de experiencias de violencia, migración forzada y situaciones de abuso. Al comienzo del acompañamiento vivían en condiciones de aislamiento, con señales evidentes de deterioro en su bienestar emocional y sin conocimiento de las rutas institucionales disponibles para recibir apoyo. Fue en ese punto donde la ruta de acompañamiento psicosocial a familias empezó a marcar una diferencia real. A través de atención profesional, orientación para activar servicios y espacios de fortalecimiento emocional, Orlando y Edith



comenzaron a reconstruir, paso a paso, capacidades de afrontamiento que la adversidad había debilitado. Lo que al principio fue contención, con el tiempo se convirtió en confianza; lo que empezó como atención en crisis terminó abriendo camino a una recuperación más profunda.

Con el paso de los meses, no solo recuperaron estabilidad emocional, sino que también fortalecieron sus vínculos con el entorno y comenzaron a participar activamente en iniciativas locales. Volvieron a reconocer en sí mismos habilidades, posibilidades y motivos para seguir adelante. Hoy son vistos por su comunidad como referentes de resiliencia y apoyo mutuo, una muestra concreta de que la atención integral no solo responde a la urgencia, sino que puede transformar una experiencia de desarraigo en un proceso de integración, esperanza y reconstrucción social.

El programa **Apoyo a la Integración Local Sostenible de Venezolanos Vulnerables y Comunidades de Acogida en Colombia**, en alianza con la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, acompañó a más de 28.000 personas en ese mismo punto de partida, logrando que más de 13.000 avanzaran hacia procesos reales de integración social y económica, incluyendo su regularización, acceso a servicios y empleo. Sin embargo, lo que marca la diferencia no es únicamente la cifra, sino el recorrido: integrar atención psicosocial, generación de ingresos, acceso a derechos y fortalecimiento institucional en una misma ruta permitió que, con el tiempo, personas como Orlando y Edith dejaran de verse como beneficiarios y empezaran a convertirse en apoyo para otros. Ahí es donde el impacto deja de ser lineal y empieza a multiplicarse.

PRM | CUANDO LA INTEGRACIÓN SE VUELVE TERRITORIO COMPARTIDO

En el barrio Don Bosco, en Soledad, un espacio público deteriorado dejó de ser un símbolo de abandono para convertirse en un lugar de encuentro. A través del proyecto Recuperando Espacios, Sanando Vidas, familias migrantes venezolanas y vecinos colombianos trabajaron juntos para transformar un área olvidada en un escenario para el deporte, la cultura y la convivencia. Lo que comenzó como una jornada puntual terminó convirtiéndose en una experiencia de construcción colectiva.

En ese proceso, jóvenes asumieron liderazgos, líderes comunitarios fortalecieron su organización y las autoridades locales empezaron a reconocer el valor del espacio dentro de sus propios planes de desarrollo. Hoy, ese lugar no solo sirve para reunirse; representa una idea mucho más poderosa: que la integración deja de ser un concepto abstracto cuando las comunidades participan juntas en la transformación de su entorno.



En otros territorios, salvar vidas implicó mirar donde casi nunca se mira. El programa **Reconocimiento y Dignidad para la Vida Plena de las Personas Mayores**, desarrollado junto al Ministerio de Igualdad y Equidad, partió de una pregunta sencilla pero incómoda: ¿qué ocurre con quienes no acceden a ningún servicio porque, sencillamente, no pueden llegar? En 14 municipios marcados por la pobreza multidimensional, la afectación histórica del conflicto armado, la presencia de comunidades étnicas y una débil oferta institucional, esta pregunta era cotidiana. Para muchas personas mayores, la vejez estaba atravesada por el aislamiento, la ausencia de redes de cuidado y una persistente sensación de invisibilidad.

La respuesta fue cambiar el punto de partida. En lugar de esperar, los equipos fueron al encuentro. A través de un modelo de proximidad territorial con enfoque diferencial, se desplegaron equipos psicosociales directamente en los hogares, en las veredas, en los lugares donde la vida realmente ocurre. Así, más de 460 personas mayores fueron caracterizadas en sus condiciones reales, no solo para levantar información, sino para comprender sus trayectorias, sus necesidades y también sus saberes.

La innovación no estuvo únicamente en llegar, sino en cómo hacerlo: una metodología de acompañamiento integral que articuló el enfoque psicosocial con la activación de redes comunitarias, el reconocimiento del conocimiento ancestral como un activo y la conexión efectiva con la oferta institucional local. En ese proceso, 53 organizaciones comunitarias y 30 iniciativas lideradas por personas mayores comenzaron a tejer una red que antes no existía, transformando la intervención en una dinámica colectiva más sostenible.

El aprendizaje fue contundente: la atención a las personas mayores no puede limitarse a respuestas individuales ni a acciones institucionales aisladas. Requiere una mirada integral que conecte lo personal, lo familiar y lo comunitario, y que parta de la presencia, la escucha y la adaptación cultural. Esta experiencia no solo permitió responder a una necesidad urgente, sino que abrió una ruta clara de escalabilidad: un modelo replicable en otros territorios con condiciones similares y, sobre todo, un insumo concreto para fortalecer la política pública de envejecimiento y vejez en Colombia, con evidencia construida desde el territorio.



Promover el crecimiento económico

Cuando quedarse deja de ser una apuesta incierta

En muchas zonas rurales del país, la decisión de irse no comienza necesariamente con la violencia. Comienza cuando quedarse deja de ser sostenible: cuando producir ya no alcanza, cuando los ingresos se vuelven inestables y cuando el territorio deja de ofrecer condiciones para proyectarse a futuro. Es en ese punto —silencioso, pero decisivo— donde las familias empiezan a romper su vínculo con la tierra, no por falta de arraigo, sino por falta de alternativas.

El programa **Familias en su Tierra**, en su décima intervención y en alianza con Prosperidad Social, ha trabajado precisamente sobre ese punto de quiebre. Con presencia en 73 municipios de 18 departamentos priorizados, cerca de 27.000 hogares rurales han sido vinculados a un proceso de acompañamiento integral que va mucho más allá del apoyo productivo. A través de la implementación de unidades productivas para autoconsumo, las familias han fortalecido su seguridad alimentaria, mientras que el desarrollo de proyectos productivos familiares ha permitido avanzar hacia una generación más autónoma y sostenible de ingresos.

Más allá de los resultados, el valor del programa está en la forma en que estos componentes se articulan en el territorio. La seguridad alimentaria, la generación de ingresos, el mejoramiento de la habitabilidad y el fortalecimiento de la organización comunitaria operan como un sistema que devuelve estabilidad y sentido de arraigo. Aprender haciendo, gestionar colectivamente y producir con una lógica de permanencia han permitido que muchas familias no solo recuperen capacidades, sino que resignifiquen su relación con el campo. En ese proceso, quedarse deja de ser una imposición o una forma de resistencia, y empieza a convertirse, nuevamente, en una decisión posible.

En las ciudades, el reto adoptó otra forma, pero tenía una raíz similar. Para muchas personas migrantes, retornadas y comunidades de acogida en territorios como Cali, Palmira, Barranquilla, Pasto e Ipiales, el desafío no era únicamente generar ingresos, sino sostenerlos en medio de la informalidad, la incertidumbre y tensiones sociales cada vez más visibles. La competencia por oportunidades económicas, las barreras de acceso al empleo formal y la debilidad en capacidades empresariales no solo limitaban el crecimiento, sino que también profundizaban la fragmentación social.



El trabajo desarrollado con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en alianza con la Embajada de Corea, partió de una comprensión más amplia del problema: un emprendimiento no se sostiene únicamente con capital o formación técnica, sino con estabilidad emocional, redes de apoyo y confianza en el entorno. Bajo esta premisa, se implementó un modelo integral de inclusión socioeconómica que articuló formación empresarial, acompañamiento psicosocial, fortalecimiento del liderazgo comunitario y capitalización productiva. A través de procesos prácticos de formulación de planes de negocio, asesoría personalizada y entrega de activos, los participantes no solo fortalecieron sus unidades productivas, sino que también desarrollaron capacidades financieras, organizativas y de gestión que les permiten proyectarse con mayor autonomía. Paralelamente, los espacios de integración comunitaria promovieron el diálogo, la cooperación y la construcción de confianza entre población migrante y comunidades locales, sentando bases para economías más inclusivas y sostenibles.

Karin lo vivió así. Llegó a Barranquilla con un negocio frágil y una vida profundamente afectada por la pérdida de su hogar, sus pertenencias y años de esfuerzo. El proceso no solo le permitió fortalecer su emprendimiento, sino también reconstruirse emocionalmente en un entorno de apoyo y aprendizaje. Cuando dice que volvió a creer, no está hablando solo de ingresos; está hablando de recuperar sentido, confianza y propósito. Su historia refleja con claridad el alcance de este modelo: intervenciones que no solo impulsan capacidades económicas, sino que también reconstruyen el tejido emocional y comunitario que hace posible sostenerlas en el tiempo.

Este proceso dejó una lección contundente: la inclusión económica solo es sostenible cuando se construye junto con la integración social. El fortalecimiento empresarial, por sí solo, no basta si no se acompaña de redes, liderazgo y cohesión comunitaria. De cara al futuro, este modelo ofrece una ruta clara de escalabilidad en territorios con dinámicas migratorias similares, donde la articulación entre cooperación internacional, gobiernos locales y comunidades puede transformar la asistencia en oportunidades reales de desarrollo y convivencia.



OIM | EMPRENDER DESPUÉS DE LA PÉRDIDA

Karin Gil, fundadora de Payasitas OliOli en Barranquilla, atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida cuando llegó al proyecto implementado con OIM, PADF y la Embajada de Corea. Había perdido su casa, sus enseres y años enteros de esfuerzo. Con esa pérdida llegó también la depresión, la sensación de haber quedado detenida en un punto del que parecía imposible salir. Entonces apareció un espacio que no solo ofrecía herramientas para fortalecer un emprendimiento, sino algo más raro y valioso: paciencia, escucha y humanidad.

Ella misma lo dijo con una claridad conmovedora: el proceso fue una terapia, un refugio, un escalón para levantarse. Aprendió, se reconectó con otras personas, recuperó motivación y volvió a sonreír. Su historia recuerda una verdad que a veces los informes pasan por alto: el fortalecimiento económico también puede ser una forma de reparación emocional. Cuando eso ocurre, el impacto deja de ser transaccional para convertirse en esperanza.

Esa misma comprensión se profundizó en el proyecto **Mujeres Echando Raíces (MERA)**, implementado con Expertise France y Fundación WWB en la Comuna 15 de Cali, un territorio donde convergen mujeres refugiadas, migrantes venezolanas y mujeres colombianas que enfrentan barreras estructurales para acceder a oportunidades, ejercer sus derechos y participar en la vida comunitaria. Allí, el desafío no era solo formar, sino crear condiciones reales para que las mujeres pudieran sostener su participación en medio de la informalidad laboral, las responsabilidades de cuidado y la desconfianza hacia los procesos institucionales.

El proyecto respondió a este contexto con una estrategia de convocatoria activa en territorio y un acompañamiento progresivo que permitió identificar, contactar y vincular a las mujeres desde sus propias dinámicas cotidianas. De las 693 mujeres identificadas, 266 fueron contactadas y 108 lograron vincularse de manera sostenida a los procesos formativos, mientras que otras 54 participaron en espacios complementarios. El valor de este modelo estuvo en su capacidad de adaptarse: el ajuste de los mensajes, la articulación con lideresas comunitarias y la alianza con la Subsecretaría de Equidad de Género —que permitió el cuidado de hijos e hijas durante los talleres— redujeron barreras concretas de acceso y facilitaron la permanencia.



En ese contexto, los espacios formativos se transformaron en algo más que escenarios de aprendizaje. Se convirtieron en lugares de confianza donde las mujeres pudieron compartir sus experiencias, reconocer situaciones de violencias basadas en género que antes no identificaban y fortalecer su capacidad de tomar decisiones informadas sobre su bienestar y el de sus familias. A partir de estos encuentros, también se construyeron redes y se identificaron rutas institucionales, fortaleciendo el acceso a derechos desde una lógica colectiva. El aprendizaje es claro: la inclusión económica y social de las mujeres no ocurre cuando se abren cupos, sino cuando se transforman las condiciones que limitan su participación. Requiere presencia en el territorio, acompañamiento sostenido y una articulación efectiva entre actores institucionales y comunitarios. Este modelo, basado en la confianza y el fortalecimiento de redes, ofrece una ruta concreta de escalabilidad: formar lideresas, consolidar comunidades de apoyo y ampliar espacios donde las mujeres no solo accedan a oportunidades, sino que puedan sostenerlas y apropiarse de ellas.

En paralelo, el trabajo con la Unidad para las Víctimas permitió dar un paso más: conectar la reparación con la sostenibilidad económica en territorios donde la exclusión, la inseguridad y las barreras de acceso a derechos siguen marcando la vida cotidiana. En 27 departamentos del país, el proyecto acompañó a comunidades que no solo han sido afectadas por el conflicto armado, sino también por condiciones estructurales que dificultan su estabilización, desde la dispersión geográfica hasta los impactos de eventos climáticos y dinámicas sociales complejas que tensionan la operación en campo.

En este contexto, la intervención no se limitó a la entrega de apoyos, sino que incorporó un enfoque más estratégico y proactivo. A través del uso de herramientas digitales para la captura de información y el perfilamiento productivo de 2.000 hogares, se diseñaron planes de inversión ajustados a las realidades de cada familia, integrando además criterios de seguridad y salud en el trabajo, formación en economía circular y acompañamiento técnico sostenido. Este enfoque permitió que las unidades productivas no solo se activaran, sino que avanzaran hacia esquemas más estables y sostenibles en el tiempo.

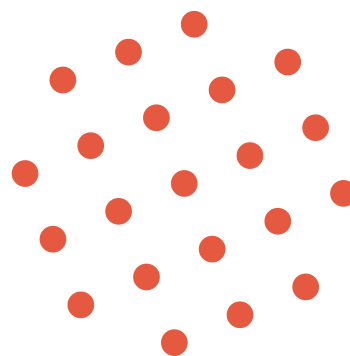


Los resultados reflejan ese cambio de enfoque. Más de 2.000 unidades de negocio fueron fortalecidas y 170 proyectos comunitarios se implementaron en su totalidad, beneficiando a población retornada y reubicada, mientras que 43 Sujetos de Reparación Colectiva consolidaron capacidades organizativas y de liderazgo en 13 departamentos. Sin embargo, el impacto más significativo se evidencia en territorios como el Chocó, donde la fragmentación de proyectos permitió ampliar el alcance hacia comunidades rurales dispersas, respondiendo de manera más pertinente a sus necesidades y fortaleciendo el arraigo territorial. En estos contextos, la experiencia dejó un aprendizaje claro: la reparación integral solo es efectiva cuando se articula con una gestión territorial flexible, coordinada y anticipativa, donde las alianzas institucionales y el rol activo de las comunidades se convierten en el eje para sostener el impacto más allá de la intervención.

UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS | PRESERVAR LA IDENTIDAD TAMBIÉN ES REPARAR

En el Resguardo Inga de Aponte, en Nariño, la entrega de instrumentos musicales y elementos deportivos fue el inicio, no el final, del proceso. A partir de allí, la comunidad participó en talleres de gobierno propio y guardia indígena, donde sabedores y líderes tejieron contenidos desde sus propios referentes culturales. Lo que se fortaleció no fue solo una oferta de actividades, sino una forma de cuidar a niñas, niños y jóvenes desde la identidad, el arte y la organización comunitaria.

El resultado fue más profundo que una dotación. Se consolidaron capacidades de liderazgo, comunicación asertiva y defensa del territorio, al tiempo que se reafirmó la autonomía cultural como base para la protección. En Aponte, reparar no fue solo restituir bienes o entregar insumos; fue fortalecer la capacidad colectiva de una comunidad para seguir nombrándose, cuidándose y proyectándose desde lo que es.



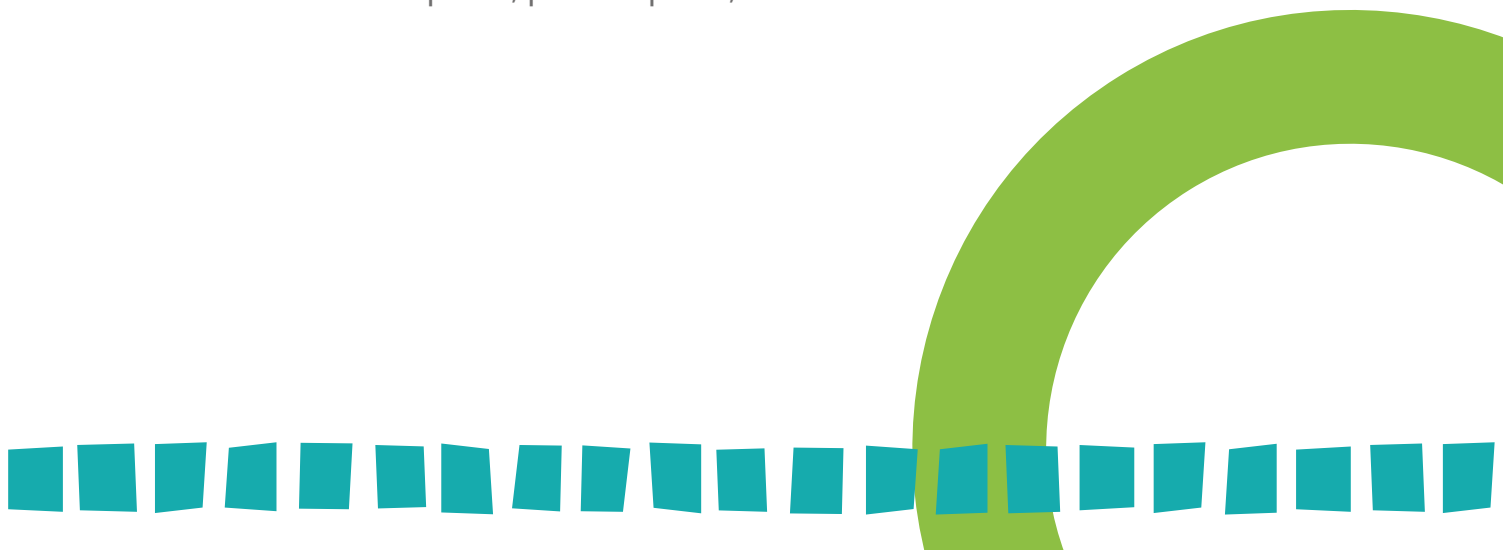
Fortalecer la seguridad y el Estado de derecho Reconstruir lo que no se ve

Hay lugares donde la institucionalidad existe, pero la confianza no. Y sin confianza, cualquier esfuerzo resulta insuficiente.

El proyecto **Combatiendo la Corrupción Pública en Colombia (CPCC)**, en alianza con la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), operó en un terreno particularmente complejo durante 2025, marcado por la suspensión temporal de la cooperación internacional, cambios institucionales y la necesidad de reconfigurar acuerdos con las entidades del Estado. En ese escenario, más que detenerse, el proyecto se adaptó: reestructuró su operación, reconstruyó la confianza institucional y reactivó procesos técnicos en un contexto de alta incertidumbre.

El fortalecimiento de capacidades no se limitó a la formación de más de 4.000 funcionarios en todo el país, sino que incorporó metodologías prácticas que acercaron la teoría a la realidad. A través de casos simulados de corrupción que replicaban escenarios reales de investigación y judicialización, fiscales, jueces y equipos de policía judicial pudieron entrenar habilidades clave para enfrentar delitos cada vez más complejos, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas, el análisis de evidencia digital y la estructuración de casos con mayor solidez jurídica.

Sin embargo, el cambio más significativo se evidenció fuera de las instituciones. La creación y puesta en marcha de la Línea Anticorrupción 157 permitió que la ciudadanía encontrara un canal efectivo para denunciar, acumulando más de 27.000 reportes en su primer año y activando más de 120 casos ante la Fiscalía General de la Nación. Denunciar, en este contexto, deja de ser un acto aislado y se convierte en una señal de algo más profundo: la posibilidad de confiar en que el sistema puede responder. Y cuando eso ocurre, la relación entre ciudadanía e institucionalidad empieza, poco a poco, a transformarse.



CPCC | DORA CÁCERES Y LA RÉPLICA QUE MULTIPLICA CAPACIDADES

Cuando la fiscal Dora Cáceres, de la seccional Bolívar, terminó su proceso de formación, entendió que el verdadero valor de lo aprendido no estaba en conservarlo, sino en compartirlo. Por eso decidió replicar los contenidos con sus colegas, especialmente en temas clave como planeación estratégica de casos, audiencias preliminares, terminaciones anticipadas y audiencias de juzgamiento en procesos de corrupción. Su iniciativa convirtió una capacitación individual en una apuesta colectiva por fortalecer la capacidad instalada de su seccional.

Ese gesto tiene una fuerza particular porque habla de sostenibilidad. Habla de conocimiento que no se agota en quien lo recibe, sino que circula, se adapta y permanece en el territorio. Gracias a esa decisión, más funcionarios accedieron a herramientas especializadas para investigar y judicializar con mayor solidez, mejorando su desempeño y fortaleciendo la respuesta institucional. La historia de Dora demuestra que, cuando una persona decide apropiarse del aprendizaje y convertirlo en conocimiento compartido, el impacto deja de ser puntual y empieza a volverse sistema.

Ese mismo año, el proyecto **Combatiendo los Delitos Financieros en Colombia (CFCC)** enfrentó un escenario particularmente complejo, marcado por la suspensión temporal de la cooperación internacional, cambios institucionales, tensiones bilaterales y ajustes presupuestales que obligaron a detener y replantear la operación. En ese contexto, el reto no fue solo retomar actividades, sino reconstruir condiciones de confianza, rearticular actores y redefinir rutas de trabajo con entidades que también atravesaban procesos de transición interna.

Lejos de detenerse, el proyecto asumió esta coyuntura como una oportunidad para fortalecer sus bases. En lugar de priorizar resultados inmediatos, se enfocó en la construcción de un diagnóstico integral y en la formulación de Planes de Asistencia Técnica diseñados de manera conjunta con las entidades beneficiarias. Este proceso, acompañado por expertos y respaldado por alianzas académicas de alto nivel como la Universidad de los Andes, permitió definir prioridades estratégicas, establecer cronogramas realistas y generar un marco técnico sólido para la implementación futura.



Al mismo tiempo, se avanzó en la articulación interinstitucional mediante espacios de trabajo sobre temas críticos como los criptoactivos y el acceso a información financiera, abriendo canales de cooperación entre entidades públicas y actores del sector privado. Estos avances, aunque menos visibles, resultan fundamentales en un contexto donde los delitos financieros evolucionan rápidamente y requieren respuestas coordinadas y técnicamente robustas.

En este sentido, el proyecto deja una lección clara: no todos los resultados son inmediatos ni tangibles en el corto plazo. Algunos son estructurales, como la construcción de confianza, la definición de rutas técnicas y la consolidación de alianzas estratégicas. Y son precisamente estos los que permiten sostener, a largo plazo, una capacidad institucional más sólida para enfrentar fenómenos delictivos cada vez más complejos.

El convenio con la **Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)**, en el marco del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa Gratuita (SAAD), permitió avanzar de manera significativa en la garantía del derecho a la defensa de los comparecientes, un elemento central para el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz. En un contexto donde asegurar la representación jurídica adecuada es clave para el desarrollo de las actuaciones ante la JEP y para la legitimidad del sistema, el convenio logró consolidar una operación robusta que integró defensa técnica, asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial como parte de una misma ruta de atención.

Los resultados dan cuenta de ese esfuerzo articulado. Más de 2.000 comparecientes fueron atendidos, a través de 10.821 actuaciones que incluyeron asesorías jurídicas, representaciones judiciales, acompañamientos psicosociales, acciones constitucionales y espacios de coordinación interinstitucional. Este volumen de atención no solo refleja capacidad operativa, sino también la complejidad de los procesos que atraviesan quienes participan en la justicia transicional, donde cada actuación requiere rigor, oportunidad y enfoque diferencial.

La innovación del modelo no fue visible en la superficie, sino en su funcionamiento interno: un esquema operativo sincronizado que permitió articular equipos jurídicos, psicojurídicos y analistas de contexto para responder de manera integral a las necesidades de los comparecientes. Esta coordinación hizo posible que los servicios no operaran de forma fragmentada, sino como un sistema coherente, capaz de garantizar el debido proceso y de acompañar de manera continua a quienes participan en estos escenarios.



El valor de este convenio radica en su contribución a la confianza en la justicia transicional. Al asegurar una defensa técnica con estándares de calidad y un acompañamiento permanente, el proceso no solo fortalece el ejercicio del derecho, sino que también aporta a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. En ese sentido, su impacto trasciende lo jurídico: se convierte en una pieza clave para la construcción de una paz estable y duradera en el país.

En territorios históricamente excluidos, donde la presencia institucional ha sido intermitente y las brechas sociales se han acumulado durante décadas, el trabajo con **Fondo Paz** representó mucho más que la ejecución de proyectos. A través del convenio de cooperación con esta entidad, se implementaron 84 iniciativas en regiones como Arauca, Catatumbo, Chocó, Pacífico nariñense y Bajo Cauca, alcanzando una ejecución cercana al 99 % y consolidando una intervención con amplio alcance territorial.

Sin embargo, el verdadero diferencial no estuvo únicamente en la infraestructura construida o en los servicios fortalecidos, sino en la forma de intervenir. El modelo integró de manera intencional lo físico y lo social: mientras las obras mejoraban condiciones concretas de acceso a salud, movilidad y espacios comunitarios, los procesos de participación, formación y articulación institucional reconstruían vínculos que habían sido debilitados por años de abandono y conflicto.

En territorios como Arauca, por ejemplo, el mejoramiento de centros de salud y de las condiciones de acceso no solo redujo barreras geográficas, sino que permitió algo más profundo: que las comunidades volvieran a participar en la gestión de su propio desarrollo y que la relación con las instituciones comenzara a transformarse. En estos contextos, el cambio no se mide únicamente en obras entregadas, sino en la capacidad de generar confianza, apropiación y procesos sostenibles en el tiempo.



FONDO PAZ | INFRAESTRUCTURA QUE ACERCA DERECHOS

En comunidades rurales de Arauca, mejorar un centro de salud o las condiciones de movilidad no fue simplemente una intervención física. Fue, para muchas personas, la diferencia entre tener o no tener acceso oportuno a atención médica, entre seguir enfrentando barreras geográficas históricas o empezar a superarlas. Lo que cambió no fue solo la infraestructura: cambió la relación entre distancia, dignidad y posibilidad.

Pero quizá el efecto más profundo estuvo en otro plano. La participación de las comunidades en la planeación y seguimiento de estas intervenciones permitió que la obra no se viviera como una decisión lejana, sino como un proceso compartido. En territorios donde la desconfianza hacia las instituciones ha sido una herida persistente, esa articulación ayudó a reconstruir vínculos, fortalecer la apropiación social y recordar algo fundamental: cuando el Estado llega con escucha, coordinación y resultados, también puede volver a ser creíble.

Ese mismo principio se refleja en el trabajo con la **Agencia Nacional de Tierras (ANT)**, donde lo técnico deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un habilitador de decisiones estructurales. En el marco de la Reforma Rural Integral, avanzar en el acceso a la tierra implica mucho más que identificar predios: exige intervenir en territorios complejos, articular información dispersa y garantizar que cada decisión esté respaldada por evidencia sólida y oportuna.

En este contexto, el convenio con esta entidad del Gobierno de Colombia ha permitido integrar dos dimensiones que tradicionalmente operaban de forma separada: el rigor técnico y la capacidad operativa en territorio. A través de la realización de 165 levantamientos topográficos, el análisis de 168 predios y la ejecución de 13 apoyos operativos, se ha logrado no solo producir insumos técnicos clave, sino también viabilizar su aplicación en contextos reales, donde factores logísticos, institucionales e incluso de orden público inciden directamente en la posibilidad de avanzar. La combinación entre análisis cartográfico, revisión jurídico-técnica y despliegue operativo ha permitido acelerar la preparación de insumos para la toma de decisiones, fortaleciendo la trazabilidad y la coordinación institucional del proceso.



El valor de este convenio radica en lo que ocurre en el territorio. La gestión predial deja de ser un ejercicio de escritorio y se convierte en una operación dinámica que moviliza equipos, articula actores y genera condiciones concretas para que los procesos avancen. Este enfoque deja un aprendizaje clave: el acceso a la tierra no depende únicamente de la calidad del análisis técnico, sino de la capacidad institucional para responder con agilidad y de manera integral. En esa articulación entre conocimiento, operación y territorio se juega buena parte de la posibilidad de transformar el ordenamiento de la propiedad rural en el país.

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | TÉCNICA Y OPERACIÓN AL SERVICIO DE UNA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL

En los procesos de acceso a tierras, el verdadero desafío rara vez está solo en el papel. Está en la capacidad de llegar al territorio, levantar información con rigor, articular actores, activar logística, organizar documentos y sostener una operación que permita avanzar incluso en contextos complejos. Por eso, el valor del convenio con la Agencia Nacional de Tierras no se explica únicamente en los productos entregados, sino en la manera en que hizo posible que el Estado actuara con mejores insumos y mayor capacidad de respuesta.

Más allá de los análisis prediales y los levantamientos topográficos, esta experiencia mostró que el acceso a la tierra exige una combinación fina entre conocimiento técnico y músculo operativo. En esa articulación se juega buena parte de la posibilidad de reducir brechas, fortalecer el ordenamiento social de la propiedad y aportar de manera concreta a la Reforma Rural Integral. En otras palabras, no se trata solo de revisar predios; se trata de crear condiciones reales para que una transformación estructural avance.

En La Guajira, el proyecto **ENLAZA**, desarrollado en alianza con el **Grupo Energía Bogotá**, demostró que el desarrollo solo es sostenible cuando se construye desde la identidad. En territorios habitados por comunidades indígenas wayuu, donde las brechas en acceso a infraestructura, servicios básicos y presencia institucional han sido históricas, el reto no era únicamente intervenir, sino hacerlo de manera respetuosa, pertinente y alineada con su cosmovisión y formas de organización propia.



En este contexto, el proyecto implementó un modelo de inversión social con enfoque étnico y territorial basado en la cocreación. Más de 110 comunidades participaron activamente en procesos de diálogo, diseño y ejecución de 148 iniciativas de infraestructura social, educativa, cultural y sagrada, beneficiando directamente a cerca de 13.000 personas. Pero lo verdaderamente transformador no fue la escala, sino la forma: las iniciativas no fueron diseñadas para las comunidades, sino con ellas, incorporando sus decisiones, sus tiempos y sus formas de habitar el territorio. La ejecución directa de recursos por parte de autoridades tradicionales y la integración entre actores comunitarios, públicos y privados permitieron construir intervenciones con legitimidad y sostenibilidad.

En lugares como La Sabana, este enfoque se hizo tangible en la construcción de un templo y una enramada comunitaria que hoy funcionan como espacios de encuentro espiritual, transmisión de saberes y cohesión social. Allí, la infraestructura dejó de ser únicamente un resultado físico y se convirtió en un símbolo de identidad y pertenencia. La experiencia deja un aprendizaje claro: el desarrollo en territorios étnicos no se impone; se construye desde el diálogo intercultural. Y es precisamente en esa articulación entre conocimiento ancestral, inversión y participación comunitaria donde se abre una ruta replicable para generar transformaciones con sentido y legitimidad en otros territorios del país.

ENLAZA | AUTOGESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUTURO

En Shirramana, una iniciativa desarrollada bajo la metodología Iniciativas con Balance Positivo (IBP®) permitió que la comunidad avanzara en actividades priorizadas por ella misma, de acuerdo con sus necesidades sociales y organizativas. El proceso involucró a autoridades tradicionales y habitantes en la planeación, ejecución y seguimiento, y eso cambió no solo la forma de intervenir, sino también la manera de entender el desarrollo.

Lo importante no fue únicamente la mejora concreta en el entorno, sino lo que ocurrió durante el camino: la comunidad fortaleció sus capacidades para organizarse, administrar recursos y tomar decisiones colectivas. Asumió un papel protagónico y comprobó que podía liderar procesos propios con corresponsabilidad y visión de largo plazo. En un contexto donde muchas comunidades han sido históricamente tratadas solo como receptoras de intervenciones, Shirramana dejó una lección distinta: cuando se reconoce el liderazgo local, el impacto no termina con un proyecto; se convierte en posibilidad de futuro.

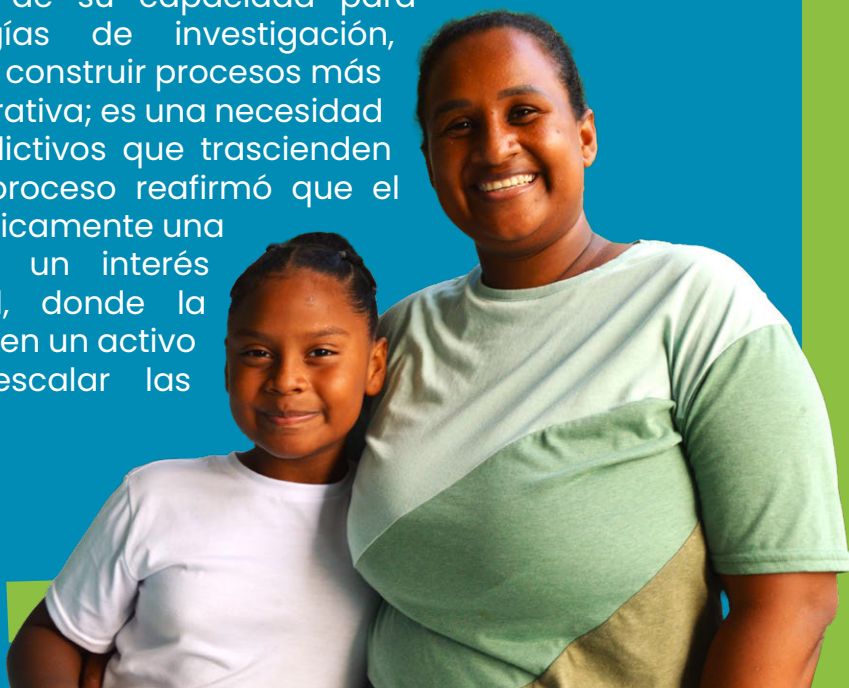


Aprendizajes 2025: lo que realmente deja este año

2025 no fue un año cómodo. Fue un año exigente, cambiante y retador. Un año que obligó a salir de las certezas y a operar en medio de ajustes constantes, donde cada decisión exigía leer el contexto con mayor atención, escuchar con más profundidad y actuar con mayor flexibilidad. Sin embargo, precisamente en esa complejidad se consolidó uno de los aprendizajes más importantes: el impacto no se construye únicamente en la ejecución, sino en la capacidad de aprender mientras todo cambia.

Este fue un año que no permitió respuestas lineales. Exigió rediseñar sobre la marcha, negociar en escenarios inciertos y, sobre todo, reconocer los límites de los modelos tradicionales. En ese proceso, más que resultados aislados, emergieron patrones que hoy orientan el rumbo institucional. El primero de ellos es claro: los problemas complejos no admiten soluciones parciales. En los procesos de acceso a tierras, por ejemplo, quedó en evidencia que el componente técnico —levantamientos topográficos o análisis predial— es solo una parte de la ecuación. Sin una estructura operativa capaz de responder con agilidad en territorio, esos insumos pierden valor en el momento más crítico: la toma de decisiones. Lo que permitió avanzar no fue únicamente la calidad técnica, sino la integración entre lo técnico y lo operativo, articulando información, despliegue territorial, gestión documental y soporte logístico en un mismo sistema de respuesta.

Esa misma lógica se trasladó al fortalecimiento institucional. En un entorno donde las organizaciones criminales evolucionan con rapidez e incorporan tecnologías cada vez más sofisticadas, quedó claro que la capacidad del Estado para responder depende directamente de su capacidad para adaptarse. Actualizar metodologías de investigación, fortalecer herramientas de análisis y construir procesos más eficientes no es solo una mejora operativa; es una necesidad estratégica frente a fenómenos delictivos que trascienden fronteras. Al mismo tiempo, este proceso reafirmó que el fortalecimiento institucional no es únicamente una prioridad nacional, sino también un interés compartido a nivel internacional, donde la confianza entre actores se convierte en un activo fundamental para sostener y escalar las intervenciones.



Otro aprendizaje, quizás uno de los más contundentes, tiene que ver con la prevención. Ningún actor por sí solo puede mitigar los riesgos estructurales. Las experiencias en prevención del reclutamiento ilícito demostraron que las estrategias más efectivas son aquellas que logran articular al Estado, la escuela, la familia y la comunidad en torno a un mismo propósito. Cuando esa red funciona, el riesgo no se gestiona después: se reduce antes de que ocurra. En ese camino, también se evidenció el valor de las metodologías culturales y artísticas como herramientas de transformación social: no solo sensibilizan, sino que movilizan, generan apropiación y sostienen procesos en el tiempo. A esto se suma un elemento fundamental: el enfoque de Cuidado Informado en Trauma, que se consolidó no como una metodología adicional, sino como una condición ética para intervenir sin revictimizar y acompañar procesos reales de bienestar.

En los territorios étnicos, el aprendizaje fue igualmente profundo: el desarrollo no puede imponerse; debe construirse desde el diálogo. Las experiencias de inversión social mostraron que la sostenibilidad no depende únicamente de los recursos, sino de la forma en que se gestionan. Cuando las comunidades participan desde el inicio, cuando sus autoridades lideran los procesos y cuando el conocimiento ancestral es reconocido como parte central de la intervención, el resultado no solo cambia: se legitima. La cocreación deja de ser un enfoque y se convierte en una condición necesaria para generar impacto sostenible. Este modelo, que articula inversión privada, institucionalidad y liderazgo comunitario, abre una ruta clara para su replicabilidad en otros territorios con características similares.

En materia de desarrollo económico, el año dejó una certeza transversal: los ingresos, por sí solos, no garantizan sostenibilidad. Las intervenciones más efectivas fueron aquellas que lograron integrar generación de ingresos con cohesión social, liderazgo comunitario y acompañamiento sostenido. En contextos migratorios, quedó claro que la inclusión económica solo es robusta cuando se conecta con procesos de integración social. Sin redes, sin confianza y sin sentido de pertenencia, los avances económicos tienden a diluirse. En el caso de las mujeres, el aprendizaje fue aún más específico: la participación no depende únicamente de la oferta, sino de las condiciones que la hacen posible. Estrategias de convocatoria cercanas, acompañamiento continuo y el reconocimiento de las dinámicas de cuidado resultaron determinantes para sostener los procesos en el tiempo.



En esa misma línea, los procesos de integración de población migrante evidenciaron que la estabilidad no se construye desde un solo frente. El acceso a derechos, el bienestar emocional, las oportunidades económicas y la articulación institucional funcionan como un sistema interdependiente. La regularización migratoria se consolida como una puerta de entrada, pero es el acompañamiento psicosocial y la construcción de redes lo que permite sostener los procesos de integración y evitar nuevas rupturas. Aquí, la articulación entre sector público, cooperación internacional y actores privados se vuelve clave para transformar la asistencia en oportunidades reales de desarrollo.

Finalmente, en las intervenciones territoriales más complejas, se reafirmó un principio transversal: la coordinación lo es todo. Los proyectos que lograron mayores niveles de impacto fueron aquellos que integraron componentes institucionales, sociales y comunitarios desde el diseño, anticiparon riesgos y construyeron alianzas estratégicas para sostener la operación en contextos difíciles. Este enfoque deja un modelo replicable para procesos de desarrollo territorial orientados a la construcción de paz: intervenciones que no solo ejecutan, sino que articulan, fortalecen y permanecen.

Si algo deja este año es una convicción clara: el futuro no se construye con modelos rígidos. Se construye con capacidad de adaptación, con lectura territorial y con la disposición de aprender incluso en medio de la incertidumbre. Los aprendizajes de 2025 no son conclusiones cerradas; son puntos de partida. Lo que permanece es esto: personas que vuelven a elegir, comunidades que vuelven a quedarse y sistemas que empiezan, poco a poco, a funcionar mejor. Ahí está el verdadero impacto.

Ahí también se reafirma algo esencial: la capacidad institucional no se mide solo por lo que ejecuta, sino por su capacidad de transformarse. En 2025, PADF Colombia no solo respondió a los desafíos; los reinterpretó. Adaptó su operación sin perder profundidad, innovó sin desconectarse del territorio y convirtió la incertidumbre en acción con sentido.

Esa es, en esencia, la capacidad que hoy nos permite seguir construyendo respuestas pertinentes, fortaleciendo actores locales y acompañando procesos que dejan huella donde más importa: en las personas, en las comunidades y en el país.



Proyección para el 2026

El 2026 representa para PADF Colombia una oportunidad para consolidar lo aprendido, profundizar su capacidad de adaptación y proyectar una cooperación más estratégica, articulada y sostenible. Después de un año marcado por la incertidumbre, nuestra prioridad será seguir fortaleciendo un modelo de intervención capaz de responder con agilidad a los cambios del entorno, sin perder profundidad técnica ni cercanía con los territorios.

En este nuevo ciclo, enfocaremos nuestros esfuerzos en ampliar y diversificar las alianzas con entidades del Estado, organismos de cooperación, sector privado, academia y actores territoriales, con el propósito de movilizar capacidades, generar valor público y construir respuestas más integrales frente a los desafíos sociales del país. Esta articulación seguirá siendo uno de los principales diferenciales de nuestra organización.

Durante 2026 también profundizaremos nuestro enfoque en resultados, aprendizaje e incidencia. Esto implica no solo implementar proyectos con altos estándares de calidad, sino también fortalecer la sistematización de experiencias, la medición de impactos y la gestión del conocimiento, como herramientas clave para mejorar la toma de decisiones, posicionar aprendizajes y abrir nuevas oportunidades de sostenibilidad institucional.

De manera complementaria, continuaremos apostándole a una cooperación más eficiente, innovadora y centrada en las personas. Seguiremos fortaleciendo capacidades comunitarias e institucionales, promoviendo soluciones adaptadas a cada contexto y generando intervenciones que conecten protección, inclusión económica, justicia y cohesión social.

Miramos el 2026 con realismo, pero también con convicción. Sabemos que los desafíos seguirán exigiendo flexibilidad, rigor y capacidad de anticipación. Sin embargo, también sabemos que contamos con una experiencia acumulada, una red sólida de aliados y un equipo comprometido que nos permite seguir construyendo oportunidades para todas las personas.

Nuestro horizonte es claro: continuar posicionándonos como un aliado confiable para el desarrollo de Colombia, capaz de tender puentes, fortalecer territorios y transformar la cooperación en resultados concretos, sostenibles y con sentido.



Situación jurídica

La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF Colombia), identificada con NIT 830.084.232-0, es una entidad extranjera independiente y sin ánimo de lucro, inscrita ante los ministerios del Interior y de Justicia mediante la Resolución n.º 185 del 8 de marzo de 2001 y domiciliada en Bogotá D. C. Informa que, al 31 de diciembre de 2025:

Ha cumplido oportunamente con las obligaciones laborales y con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, así como con las obligaciones parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por dichos conceptos.

Dio cumplimiento a las obligaciones tributarias formales y sustanciales a su cargo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con la normativa vigente aplicable a las entidades sin ánimo de lucro y al Régimen Tributario Especial.

A la fecha, la Fundación registra reclamaciones pendientes de fallo que se encuentran activas; de acuerdo con la evaluación jurídica realizada, dichos procesos han sido clasificados como contingencias eventuales.

En consecuencia, no se considera necesario efectuar provisiones contables ni estimaciones de cuantía por contingencias a cargo de la organización.

Dio cumplimiento a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, contando con políticas internas y procedimientos para el adecuado tratamiento de la información.

Evaluó la aplicabilidad de los sistemas de autocontrol y gestión del riesgo, tales como el SAGRILIFT y demás mecanismos exigidos por la normativa vigente, concluyendo que estos no le resultan obligatorios de acuerdo con su naturaleza jurídica, nivel de ingresos y actividades desarrolladas.

Cuenta con la implementación y operación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial Integral (PTEE-I), el cual se encuentra debidamente adoptado y socializado con colaboradores y contratistas, e incluye políticas anticorrupción, canales de denuncia y mecanismos de control, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022 y la Circular Externa 058 de 2022.



Propiedad intelectual y derechos de autor

Durante el año 2025, PADF Colombia dio cumplimiento a las normas vigentes sobre propiedad intelectual y derechos de autor, en particular a lo dispuesto en la Ley 23 de 1982, la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones, los tratados internacionales en materia de derechos de autor, la Decisión 486 de 2000 en materia de propiedad industrial y las demás normas que las modifiquen o adicionen. Así mismo, la Fundación protegió los artículos, modelos, documentos y demás contenidos de su propiedad, respetando en todo momento la autoría correspondiente, y garantizó el uso legal de software, licencias y contenidos digitales empleados en el desarrollo de sus actividades administrativas y misionales.

Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio

Entre enero y marzo de 2026 no se presentaron acontecimientos posteriores al cierre que afectaran de manera significativa los resultados del ejercicio correspondiente al año 2025.



Entre enero y marzo de 2026 no se presentaron acontecimientos posteriores al cierre que afectaran de manera significativa los resultados del ejercicio correspondiente al año 2025.

El valor patrimonial de la Fundación al 31 de diciembre de 2025 asciende a \$46.234.373.000 (valor en pesos colombianos), representado en activos que permiten el cumplimiento de su objeto social. Así mismo, la organización cuenta con un excedente del ejercicio, el cual será reinvertido durante el año 2026 en el desarrollo de sus programas y proyectos, garantizando la sostenibilidad financiera, la continuidad de sus operaciones y el cumplimiento de su misión institucional.

Operaciones celebradas con socios, accionistas y administradores

Durante el año 2025, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF Colombia) no realizó operaciones ni celebró negocios con administradores ni con miembros de la junta directiva.





FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO

